

Las patronales vascas podrían tomar una postura conjunta de rechazo público

Ofensiva general contra el «impuesto revolucionario»

Bilbao:
Arturo CENZANO,
enviado especial

Tras la liberación de *Lipperheide*, las patronales vascas están dispuestas a frenar el impuesto revolucionario. A la actitud firme de sus líderes (ni *Artiach* ni *Olarra* ni *Vizcaíno* han atendido nunca las exigencias de pago) puede añadirse, en los próximos días, una recomendación de rechazo en la línea mantenida últimamente por el Gobierno Vasco y el PNV. El tema ha sido abordado ya extraoficialmente y existe una coincidencia generalizada, a pesar de la división existente entre las organizaciones empresariales de Vizcaya.

Según las impresiones recogidas, el prolongado secuestro de *Lipperheide* se debió, no tanto a la exigencia de que fuera satisfecha una cifra concreta por parte del secuestrado como a la creación de un clima coactivo (de escarmiento) durante el cual podrían requerirse los «trasas». De hecho, a lo largo del mes que duró el secuestro, algunos empresarios recibieron cartas, varias de las cuales fueron denunciadas públicamente por afiliados del PNV.

Residuos

Estas circunstancias respaldan la afirmación de Garaicoechea de que el PNV y el Gobierno autónomo son hoy el primer objetivo de ETA. Los más destacados líderes peneuvistas han redoblado sus ataques contra el «impuesto», aprovechando los actos públicos.

El secuestro y la posterior liberación de *José Lipperheide* ha removido la conciencia empresarial vasca. Sus declaraciones a *DIARIO 16*, anunciando que seguiría invirtiendo en el País Vasco, han sido una bomba. Las patronales de Euskadi

están estudiando una toma de postura conjunta contra el pago del «impuesto revolucionario», que extorsiona —según los datos a los que ha tenido acceso este periódico— al 3 por 100 del empresario vasco.



Lipperheide ha removido la conciencia de los empresarios vascos en su resistencia al impuesto de ETA.

En medios empresariales de Euskadi se estima que la caída en el pago del impuesto ha sido progresiva a lo largo de los últimos dos años y que, en estos momentos, tal vez no llegue al 3 por 100

el porcentaje de quienes se hallan al corriente. Fue precisamente este descenso en picado el que aconsejó el secuestro de *Lipperheide* para cubrir un doble objetivo: Resarcirse en la provisión de fondos y provocar un «escarmiento», ya que el secuestrado gozaba de amplias relaciones en el mundo empresarial vasco.

Las patronales vizcaínas reaccionaron de forma diferente, pero con el mismo sustrato común de rechazo al pago del «impuesto». Mientras la Confederación se revolvía contra el reemprendimiento de las coacciones, el centro empresarial guardaba un escrupuloso silencio «ya que la vida humana está por encima de todo». Parece que tanto el Gobierno vasco como las patronales tenían preparada una cruda reacción si se hubiera producido una ejecución como la de *Ryan*, cuya

muerte tuvo un efecto «boomerang», al exigir el Gobierno vasco la continuación de las obras de la central de Lemóniz, hasta entonces con mucha peor prensa.

Reconversión

Según impresiones recogidas, la exigencia del «impuesto revolucionario» se halla hoy completamente cercada por las fuerzas representativas de la comunidad vasca, desde el PNV hasta los partidos nacionales y a los sindicatos ligados a ellas, como UGT o ELA-STV.

El progresivo asentimiento a los planes de reconversión ha sido otro factor decisivo, aunque todavía no se hayan resuelto todos los escollos. Para el Gobierno Vasco el problema consiste ahora en ganar tiempo (dos años de plazo), ya que los indicadores económicos empiezan a ser favorables. Euskadi conseguirá dos inversiones punteras de las captadas por la economía nacional (diez mil millones de la Villotes Guardian en Alava y alrededor de treinta mil de la colaboración Pemex-Petronor) mientras los depósitos bancarios rebasan ampliamente la media nacional.

Si la reconversión planificada por *García Egocheaga* (que cuenta con el apoyo de los empresarios de uno y otro signo) prospera en los próximos meses, el freno al deterioro puede ser el dato final que haga definitivamente impresentable la «revolución» exigida por el impuesto.